

PERIODO
PRESIDENCIAL
002520
ARCHIVO

INFORME DE ANALISIS

(AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 1990)

SEGPRES

A. ANALISIS POLITICO

1. La necesidad de definir una estrategia política que sitúe la gestión de gobierno de cara a su proyección mas allá de 1993.

Se ha venido afirmando que el Gobierno tiene una sexta meta implícita, además de las cinco enunciadas en el mensaje presidencial ante el Congreso Pleno: su proyección más allá de 1993. Para ello debe cumplir la condición de buen éxito en su gestión, que debe expresarse en resultados medibles en términos económicos y de beneficios sociales, para llegar a los eventos electorales en buenas condiciones de competitividad.

Transcurridos los primeros seis meses de gobierno, se va haciendo cada vez más evidente que no todas las metas del programa de la Concertación podrán realizarse en este corto período presidencial.

Más importante pareciera ser una buena gestión gubernamental, respecto de ciertas áreas prioritarias. Ello se hace aún más necesario en el contexto de la campaña orquestada de la derecha que acusa al gobierno de un desempeño supuestamente "mediocre".

De lo anterior se deduce que se acerca la hora de una readecuación de la estrategia de Gobierno con el objeto de armonizar el cumplimiento de metas posibles en el período presidencial con la debida fidelidad a los compromisos programáticos.

2. La tarea del crecimiento económico: clave del buen éxito.

Los beneficios que este Gobierno prometió al país pueden dividirse en dos grandes categorías:

a. **Beneficios simbólicos** o ideales: ellos procuran responder a las demandas de democratización política, de verdad, justicia y

reparación en materia de graves violaciones a los derechos humanos, de paz y orden ciudadano, de dignificación de las personas, de libertad para los presos políticos, entre otros.

b. Beneficios materiales: estos se refieren al pago de la deuda social, una redistribución de los ingresos, reasignación del gasto social, reforma de las relaciones laborales, entre otros.

La política del Gobierno asumió desde un comienzo que el esfuerzo mayor, especialmente en los primeros años, estaría dado por la realización de las metas de carácter simbólico, y que los objetivos económicos y sociales no podrían satisfacerse de inmediato en virtud de las restricciones heredadas.

Si bien es cierto que hasta ahora la ciudadanía ha mantenido una actitud comprensiva es dable esperar que, a medida que transcurran los meses, las expectativas se irán transformando en exigencias, por lo cual debe preverse desde ahora cómo responder a un clima de mayores demandas.

Si asumimos que la satisfacción de necesidades sociales en el campo de los salarios, la vivienda, la salud y la educación serán nuestros objetivos a partir de 1991 - 1992, es obvio que **debemos proponernos una estrategia de crecimiento económico y no una de mera redistribución, que resultaría claramente insuficiente.** Para ello deberá reafirmarse la voluntad del Gobierno de caminar por la senda del crecimiento, y enviarse señales fuertes a los principales actores del desarrollo económico (trabajadores y empresarios).

3. La coherencia del bloque oficialista.-

Es en este punto donde se nos plantea una exigencia de mayor coherencia entre los diversos componentes de la coalición de gobierno. En efecto, la expresión parlamentaria de esta coalición revela una tendencia creciente a la autonomización del Gobierno, especialmente en relación a ciertos temas que conlleven un previsible costo electoral para los parlamentarios. La capacidad del Gobierno de ordenar a este bloque parlamentario es aún alta, pero requiere cada vez más del apoyo de los partidos.

Por otra parte, las complejas relaciones entre la CUT, entre otros sectores sociales y el Gobierno, revelan que la misma tendencia a descolgarse de las políticas gubernamentales existe de parte del componente social de este bloque concertacionista.

Coadyuva a este fenómeno de descuelge de parlamentarios, de partidos (en menor medida) y de dirigentes sociales, la **instalación en el horizonte próximo de escenarios preelectorales**. Estos inducen a los actores a perfilar desde ahora sus comportamientos de cara a esos eventos. Lo anterior es particularmente claro en el campo sindical, donde se avizoran posicionamientos que ponen en cuestión la actual alianza que gobierna la Central.

En previsión de la agudización de estas tendencias de independencia y de perfilamiento preelectoral, que son inevitables y que sólo podemos intentar amortiguar, **el Gobierno debería promover un compromiso más nítido con una estrategia de crecimiento para los próximos años**, ya que esto a la larga cautela también, y de mejor manera, los intereses colectivos de la Concertación.

Asimismo, el momento actual debe ser propicio para afirmar la coalición de gobierno, reforzando la conducción política gubernamental y partidaria, a la vez que velando por una acción más coordinada con las bancadas parlamentarias de la Concertación.

Reforzar la política gubernamental significa al menos tres cosas: afirmar una conducción política no - presidencial que actúe como autoridad ordenadora de la acción de gobierno en el plano más cotidiano ("Area chica"), velar por la gestión gubernamental propiamente tal desde el punto de vista de su coordinación y eficacia, y adecuar la política comunicacional a estas exigencias en el plano de la conducción y la gestión.

Reforzar la conducción partidaria significa un rol más activo de las direcciones partidarias, especialmente relevante en el plano del disciplinamiento de la base social de apoyo al gobierno y del debate de opinión pública (en el cual los partidos tienen una mayor libertad que el gobierno).

Finalmente, la mayor coordinación con las bancadas parlamentarias de la Concertación implica comprometerlas en una "Lógica de Estado", que neutralice su natural inclinación a actuar como correa de transmisión de demandas e intereses sectoriales y regionales.

B. ANALISIS LABORAL

El Gobierno está consciente de que dada la ineludible necesidad de aumentar las tasas de crecimiento para financiar el mayor gasto social programado para los próximos años, se requiere otorgar seguridad a los agentes económicos e inversionistas en relación a las reglas del juego básicas de la actividad económica.

En este sentido, resulta inconducente la mantención de un clima de incertidumbre en lo relativo, entre otros puntos, a las reformas laborales que el Ministerio del Trabajo tiene en carpeta.

Por otro lado, si se considera que el crecimiento económico emerge como una de las metas principales del Gobierno, resulta recomendable el análisis de estrategias tendientes a mejorar las relaciones entre el Gobierno y los empresarios.

La estabilidad en las reglas del juego en materia laboral.

El crecimiento económico, y con ello la posibilidad de financiar los programas sociales en que está comprometido el Gobierno, dependen en gran medida de las percepciones de los agentes económicos en relación a las "reglas del juego" y su estabilidad en el tiempo.

Lo anterior implica la necesidad de distinguir con prontitud aquellas reformas impulsadas por el Ministerio del Trabajo que tengan incidencia en lo económico de aquellas que no la tienen, de modo de concluir con las primeras en el curso del presente año o cancelarlas definitivamente.

i) Ello no excluye la necesidad, igualmente imperiosa, de contar con normas e instituciones, especialmente en el plano laboral, que gocen de una suficiente legitimidad social.

ii) Asimismo, es necesario convencer y coordinar a los partidos políticos y parlamentarios de la Concertación en función de la estrategia que se adopte. Si no existe la convicción ni la coordinación necesaria, una estrategia como la descrita puede transformarse en un significativo foco de conflicto al interior de la coalición de Gobierno. En la medida en que la estrategia que privilegia el crecimiento para el período 1991-1993 suponga sacrificios al Programa de la Concertación, aumenta el riesgo de que el conflicto aflore.

CONCLUSION

Lo anterior requiere de:

i) Precisar con claridad cuáles son las reformas con incidencia económica que se impulsarán este año y cuáles quedarán definitivamente canceladas.

ii) Identificar aquellas políticas que, sin afectar las reglas del juego económico, tengan una "alta rentabilidad" social y constituyan un aporte significativo en cuanto innovación o discontinuidad. Esto contribuye a neutralizar posibles acusaciones de excesivo "continuismo".

iii) Diseñar una estrategia coherente para relacionarse con los actores sociales de mayor peso relativo, y cuya incorporación, tácita o explícita, a la estrategia del crecimiento, sea necesaria. (Por ejemplo, CUT, CPC, CTC, etc.)

Esto supondría, definir qué actores sociales se quieren privilegiar; identificar las tendencias y conflictos internos que explican las actitudes asumidas por cada actor social relevante; identificar con claridad las relaciones entre los actores sociales relevantes y los partidos políticos que en ellos tienen influencia; definir una estrategia de relaciones que permita maximizar los objetivos del Gobierno respecto a cada sector (a este respecto cabe rescatar el ejemplo de la "diversificación de la agenda" de relaciones entre la Cut y el Gobierno); hacer conocida la estrategia que se acuerde a todos los ministerios y reparticiones públicas que se relacionan con el sector o actor de que se trate, de modo de evitar que desde el gobierno se emitan signos erráticos y equívocos.

La relación del Gobierno con los empresarios.

Un análisis particular requieren las relaciones del Gobierno con los empresarios a la luz de la estrategia que pone un énfasis especial en las tareas de crecimiento económico para los próximos años.

Durante los primeros meses del Gobierno, las relaciones con los sectores empresariales han estado marcadas por las fricciones que se han producido como consecuencia de las reformas tributaria y laboral. A esto se agrega la visión crítica que tienen los sectores empresariales de la forma en que se ha aplicado el ajuste económico.

Todo aquello ha redundado en un cuadro de suspicacias que, si bien era inevitable en el contexto de las reformas señaladas, es disfuncional al objetivo de un mayor crecimiento.

Aún cuando es difícil pensar que las relaciones entre un Gobierno de Centro-izquierda y los empresarios sean óptimas, es posible pensar que, ante una política que privilegia el crecimiento económico, las coincidencias entre ambos sectores aumenten de modo tal que se potencie una estrategia concertada, o al menos convergente.

Es por eso que al Gobierno le convendría diseñar una modalidad de relaciones con los empresarios que, tratando de limar las asperezas, aumente la confianza mutua y fortalezca las iniciativas de inversión.